



**JORGE A. PACHECO B.**

Abogado Egresado Universidad Libre de Colombia – Seccional Cali  
Calle 11 # 4-42 Oficina. 221, Edificio. Colseguros, Plaza de Caicedo.  
Móvil 315 574 01 23 fijo 8 81 10 67. Email: [bohorquezalonso@hotmail.com](mailto:bohorquezalonso@hotmail.com)  
Santiago de Cali – Valle del Cauca – Colombia.

Cali, Catorce (14) de Septiembre de dos mil dieciséis (2.016)

Señor

**JUEZ ADMINISTRATIVO EN ORALIDAD DEL CIRCUITO DE CALI  
(reparto)**

E. S. D.

**JORGE ALONSO PACHECO BOHORQUEZ**, persona mayor de edad, vecino, domiciliado y residenciado en Cali (Valle), abogado titulado, litigante y en ejercicio, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19'482.790 de Bogotá D.C., portador de la tarjeta profesional No. 243.176 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi calidad de apoderado judicial principal de la señora **DEYSY MARIA SALDAÑA USURIAGA**, identificada con la cedula de ciudadanía No 31.992.387 de Cali (Valle), persona mayor de edad, vecina, domiciliada y residenciada en Cali (Valle), quien obra en nombre propio, en su condición de víctima directa, por la explosión del camión cisterna con líquido inflamable, quien se encontraba, en el establecimiento comercial denominado, COMERCIALIZADORA GPM, ubicado en el inmueble de la carrera 7 D Bis- Calle 69 urbanización Fepicol, Lote 12 Manzana C de la ciudad de Cali-Valle, el cual se destruyó totalmente; respetuosamente concurre ante su despacho conforme al poder por ella a mi otorgado para promover demanda **ORDINARIA – MEDIO DE CONTROL DE REPARACION DIRECTA-** contra: **1)- MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI**, entidad de derecho público, con sede en Cali (Valle), representada legalmente por el señor alcalde municipal **Dr. MAURICE ARMITAGE CADAVID**, o por quien haga sus veces, **2)- NACION – MINISTERIO DE TRANSPORTE- SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE**, entidad de derecho público con sede en Bogotá D.C., representada legalmente por el señor Superintendente **JAVIER ANTONIO JARAMILLO RAMIREZ**, o por quien haga sus veces, **3)- NACION- MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA**, entidad de derecho público, con sede en Bogotá D.C., representada legalmente por el Doctor **TOMAS GONZALEZ ESTRADA**, o por quien haga sus veces, con fines de que se declaren administrativamente responsables a las demandadas y la consecuencial condena al pago de los perjuicios materiales irrogados por el acaecimiento de dicho siniestro.

## **I. DE LA OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA**

Con fundamento en el literal i del numeral 2° del artículo 164 de la ley 1437 de 2011, me encuentro dentro del término de ley para instaurar esta demanda ordinaria de reparación directa -medio de control, toda vez que el hecho generador de la misma aconteció el 25 de noviembre de 2014, venciendo el término el próximo 26 de noviembre de 2016, pese haberse agotado conciliación extrajudicial administrativa el 1° de febrero de 2016 ante la Procuraduría 57 Judicial I Para Asuntos Administrativos de Cali (rad. No. 32319) sin acuerdo conciliatorio alguno.

## **II. DE LA DESIGNACIÓN DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES**

### **1.) Parte demandante**

**DEYSY MARIA SALDAÑA USURIAGA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.992.387 de Cali (Valle), persona mayor de edad, con domicilio, vecindad y residencia en Cali (Valle), quien obra en nombre propio.

#### **1.1) Apoderado judicial de la parte demandante,**

Es el suscrito **JORGE ALONSO PACHECO BOHORQUEZ**, persona mayor de edad, vecino, domiciliado y residenciado en Cali (Valle), abogado titulado, litigante y en ejercicio, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19'482.790 de Bogotá D.C., portador de la tarjeta profesional No. 243.176 del Consejo Superior de la Judicatura, quien funge como apoderado judicial principal de la parte actora.

### **2) Parte demandada**

La conforma el **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI**, entidad de derecho público, con sede en Cali (Valle), representada legalmente por el señor alcalde municipal Dr. Maurice Armitage Cadavid, o por quien haga sus veces.

**2.1) La NACION - MINISTERIO DE TRANSPORTE-SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE**, entidad de derecho público, con sede en Bogotá D.C., representada legalmente por el señor Superintendente JAVIER ANTONIO JARAMILLO RAMIREZ, o por quien haga sus veces.

**2.2) La NACION- MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA** entidad de derecho público, con sede en Bogotá D.C., representada legalmente por el Doctor TOMAS GONZALEZ ESTRADA, o por quien haga sus veces

## **III. DE LO QUE SE PRETENDE**

**PRIMERA.- DECLARAR** administrativamente responsables a la **NACION - MINISTERIO DE TRANSPORTE -SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y**

**TRANSPORTE; la NACION –MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA y EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI**, por los resultados de los sucesos provenientes y causantes del daño en el establecimiento comercial de mi mandante, acaecidos tras la explosión de camión cisterna.

**SEGUNDA.-** Consecuencialmente, **CONDENAR** a la **NACION –MINISTERIO DE TRANSPORTE –SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE; la NACION –MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA y EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI** a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente consolidado a favor de mi mandante, señora **DEYSY MARIA SALDAÑA USURIAGA** y como afectada directa la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS (**\$20.000.000.00**), que resultan del valor de la sumatoria, en los costos en que ha incurrido, para lograr, la nueva consecución de los diferentes enseres, utensilios y surtido de materia prima, para iniciar su labor, en el establecimiento de comercio, de la caseta metálica que perdió en su totalidad por los hechos causados el día de la explosión.

**TERCERA.-** Consecuencialmente, **CONDENAR** a la **NACION –MINISTERIO DE TRANSPORTE –SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE; la NACION –MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA y EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI** a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado para mi mandante, señora, **DEYSY MARIA SALDAÑA USURIAGA**, como afectada directa, la suma de **TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$32.100.000)**, que resultan de la sumatoria, del valor de los días que no ha podido trabajar; teniendo como extremos, el día de la explosión (25-11-2014), hasta la fecha de la presentación de esta demanda, (14-09-2016), sumatoria esta, resultante del valor diario de SESENTA MIL PESOS (\$60.000.00).moneda legal.

**CUARTA.-** Consecuencialmente, **CONDENAR** a la **NACION –MINISTERIO DE TRANSPORTE –SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE; la NACION –MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA y EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI** a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante futuro para mi mandante **DEYSY MARIA SALDAÑA USURIAGA** y como afectada directa, la suma que resultare del valor de la sumatoria de los días que no podrá trabajar desde la fecha de la pretensión de esta demanda y hasta la fecha en que las demandadas le reconozcan y paguen la indemnización pretendida.

**QUINTA.- ORDENAR** a la **NACION –MINISTERIO DE TRANSPORTE – SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE; la NACION –**

**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA y EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI** cumplir la sentencia en los términos de que trata el artículo 192 y siguientes de la ley 1437 de 2011, y que se reconozcan los intereses comerciales y moratorios sobre las cantidades antes mencionadas.

**SEPTIMA.- CONDENAR** a la **NACION –MINISTERIO DE TRANSPORTE – SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE; la NACION – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA y EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI** a pagar las costas tal como lo preceptúa el artículo 188 de la ley 1437 de 2011 y concordantes del Código de Procedimiento Civil.

#### **IV. DE LOS HECHOS Y OMISIONES**

**PRIMERO.-** Mi mandante hace 11 años se venía desempeñando como vendedora de frutas y jugos, en una caseta metálica diseñada para esta actividad, ubicada frente a la carrera 7 D Bis- Calle 69, urbanización Fepicol, Lote 12, Manzana C, de la ciudad de Cali (Valle).

**SEGUNDO.-** Para el día 25 de noviembre del año 2014 siendo aproximadamente las 4:30 de la tarde, se originó una fuerte explosión en el inmueble ubicado en la carrera 7 D Bis- Calle 69 urbanización Fepicol, Lote 12 Manzana C de la ciudad de Cali-Valle, donde funcionaba un expendio de combustibles denominado COMERCIALIZADORA GPM, causando la destrucción física de todo el inmueble y afectando los locales comerciales y viviendas aledañas.

**TERCERO.-** como vestigios de lo que quedo en el lugar de la explosión se pueden apreciar claramente, fotos y videos de lo que allí funcionaba desde hacía más de cinco años; toda una estructura de un establecimiento comercial dedicado al almacenamiento y comercialización de combustibles, una vez, que allí existían dos tanques de almacenamiento para productos combustibles con capacidad de 10.000 galones cada uno y además una gran cantidad de canecas metálicas de 55 galones para almacenar productos inflamables, derivados o no derivados del petróleo, así como también gran cantidad de empaques de plástico de diferentes tamaños.

**CUARTO.-** por conocimiento de toda la comuna 7, Barrio FEPICOL, (Zona industrial creada en 1970, fundada por la germinación de pequeños y medianos industriales. "Federación Propulsora de Industrias de Colombia") de la ciudad de Cali); que la COMERCIALIZADORA GPM, era un establecimiento comercial que funcionaba en el inmueble ubicado en la carrera 7D bis Numero 69-10, desde hacía más de 5 años, con toda una estructura industrial, que contaba con tanques de almacenamiento, que recibía y proveía líquidos

*industriales derivados y no derivados del petróleo, en carro- tanques y tractomulas de gran capacidad y que por su antigüedad , dimensión y su dinámica en el comercio, la comunidad aducía que era imposible su funcionamiento sin los permisos, sin la debida inspección, vigilancia y supervisión de los entes del estado encargados para estas responsabilidades,*

**QUINTO.-** *que también por conocimiento de toda la comunidad de este barrio, se observaba como periódicamente, se realizaban visitas por parte de la policía y de la alcaldía para realizar los respectivos controles. También aduciendo la comunidad que se estaban exigiendo los requisitos correspondientes para que dicha comercializadora G.P.M., funcionara y que está cumpliera con los estándares de seguridad y calidad que exige y debe cumplir esta clase de negocios para su correcto funcionamiento*

**SEXTO.-** *pues para todos los de esta comunidad, es bien sabido, que periódicamente las autoridades como el benemérito cuerpo de Bomberos, quienes están autorizados para expedir certificado de seguridad de un establecimiento, los inspectores de la alcaldía o de la oficina de planeación municipal, quienes exigen el certificado de uso de suelo, el mismo sayco y acimpro , las inspecciones de policía que entre otros visitan periódicamente esta zona, mas por ser una zona industrial, es de conocimiento de la comunidad industrial que en estas inspecciones hacen exigible los requisitos que requiere la ley para el buen funcionamiento de cualquier establecimiento, máxime que este establecimiento estaba dedicado al manejo de combustibles.*

**SEPTIMO.-** *Después de la explosión, según versiones iniciales brindadas por el señor Wilfredo Wilchez, en su condición de Jefe de Operaciones de la Defensa Civil de esta ciudad, comentó que el origen del siniestro se originó en el local comercial COMERCIALIZADORA GPM, en el inmueble donde se comercializaba líquidos combustibles.*

**OCTAVO.-** *El benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Cali (Valle), al efectuar inspección al lugar de los hechos, observaron una alta presencia de gas metano, concluyendo que una chispa desencadenó en la explosión. A su vez estudian la hipótesis de que un camión cisterna cargando y/o descargando líquidos inflamables en la COMERCIALIZADORA GPM, fue el que originó la detonación; toda vez que la fiscalía 62 seccional de Cali-Valle, encargada de investigar los sucesos no ha hecho pronunciamiento alguno.*

**NOVENO.-** *Por los acontecimientos anteriormente relatados, manifiesta mi poderdante, su lugar de trabajo, se encontraba ubicado exactamente frente al sitio de la explosión, esto es en la carrera 7 D Bis- Calle 69 urbanización Fepicol, Lote 12 Manzana C de la ciudad de Cali-Valle; quedando totalmente destruido, junto con todo cuanto contaba para realizar la actividad que ejercía*

*Desde hace 11 años, con el cual sufragaba todos sus gastos básicos para llevar una vida digna y suplir su derecho al trabajo y a mínimo vital.*

**DECIMO.-** *En el lugar de trabajo, esto es, la caseta de su propiedad, ubicada frente al sitio de la explosión, la señora DEYSY MARIA SALDAÑA USURIAGA contaba con todos los elementos que se requieren para la preparación de alimentos, elementos como licuadoras, picadora, cuchillos, vasos, ollas, platos y en general todo los enseres que se utilizan para esta clase de negocios informales, e igualmente todo el surtido en fruta, que para el día martes 25 de noviembre de 2.014 día de la explosión tenía surtido, ya que se aprovisionaba de frutas los lunes para toda la semana.*

**DECIMO PRIMERO.-** *Mi mandante señora DEYSY MARIA SALDAÑA USURRIAGA debido a este acontecimiento y por los hechos aquí narrados ha padecido gran mengua en sus ingresos; pues la caseta diseñada para la actividad que ejercía por más de 11 años, al igual que los enseres, surtidos y demás elementos que utilizaba para el normal desempeño de su mencionada actividad, quedaron totalmente destruidos e inservibles; dificultando su única actividad laboral y por ende su única fuente de ingresos, situación está que ha producido gran zozobra y desesperanza, máxime que la señora DEYSY SALDAÑA es una persona de escasos recursos y que la caseta, los elementos y el surtido que perdió, eran la base de su negocio el cual le producía su único sustento económico con el cual contaba.*

## **V. DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO**

*El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia consagra como cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, los daños antijurídicos que pudiese ocasionar por acción u omisión de las autoridades públicas.*

*Es así como, dentro de este nuevo universo constitucional, la responsabilidad no está únicamente ligada al actuar negligente, culposo o doloso; es decir, a criterios subjetivos, sino que en ciertos eventos se ha venido desplazando a criterios objetivos, fundamentados en principios de **justicia, equidad, solidaridad**, etc., en donde la importancia gira alrededor de quien sufre el daño. Es así, como puede hallarse el Estado obligado a resarcir un perjuicio causado a pesar que su actividad o actuación esté dentro de los marcos de la licitud. Esta filosofía jurídica, Argumentada desde hace varios años, se alimenta con la esencia del artículo 90 de nuestra Constitución Política, al disponer la responsabilidad estatal por los daños antijurídicos.*

*El daño antijurídico es fuente de responsabilidad estatal y a su vez la teoría de la responsabilidad objetiva, adquiere fundamento constitucional, razón por la cual surge la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado como el punto de intersección a través del cual encuadra cualquier régimen de responsabilidad.*

*El concepto de daño antijurídico no ha sido definido en nuestra legislación, pero hace varios años la jurisprudencia colombiana ha venido formando la teoría de la lesión resarcible fundamentada en el daño antijurídico, basados en la doctrina española, y es así como en distintos fallos emitidos por el H. Consejo de Estado se encuentra una concepción del daño antijurídico que lo consagra como el fundamento de todo deber y obligación de reparación.*

*De ahí, que el objetivo de la responsabilidad patrimonial del Estado es el restablecer el equilibrio económico roto cuando se lesiona un patrimonio particular por parte de la administración pública. Se ha pasado de la llamada antijuricidad subjetiva, que exigía el dolo, la culpa o falta del funcionario de la administración para generar la responsabilidad del Estado, a la llamada antijuricidad objetiva, que tiene como fundamento el daño ocasionado a la víctima, que pasa a ser el elemento más importante de la responsabilidad patrimonial estatal.*

*El motivo que se alude es, en concreto así: los objetivos y la naturaleza de los establecimientos aquí demandados, MINISTERIO DE TRANSPORTE – SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA y EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, son entidades encargadas de la supervisión, vigilancia y Control, tanto del transporte como del almacenamiento y la distribución de líquidos combustibles, son estas entidades determinadas por la ley, las encargadas de estos procedimientos, a su vez que ellas delegan en otras, las funciones subjetivas de realizarlo; pero son ellas las responsables de que se llevan a cabo estos controles, frente a ello podemos invocar el principio de la " CULPA IN VIGILANDO".*

*Si observamos los requisitos para crear inicialmente un establecimiento comercial, cualquiera que sea su finalidad, se deben cumplir con ciertos requisitos, en este caso su principal requerimiento es el uso de suelos, exigido por el departamento de planeación o quien haga sus veces, el objetivo de este certificado, es que la autoridad competente, certifique que la actividad desarrollada por el establecimiento certificado puede desarrollarse en el lugar declarado. Claro está, después de inscribirse en el registro mercantil, entendido como el instrumento legal, que tiene como objeto llevar la matrícula de los comerciantes y los establecimientos de comercio, seguidamente debe ser visitado por el cuerpo de bomberos, para que dicho negocio se le expida el Certificado de seguridad Cuya única finalidad, es que el establecimiento de*

*comercio cumpla con las normas de seguridad, para no colocar en riesgo tanto el establecimiento como su entorno, , ello sin contar con la inscripción en el Ruth, visita de control de pesos y medidas, concepto sanitario, visitas de la inspección de policía entre otras, En términos generales, son estas las intervenciones del estado para el control, vigilancia e inspección sobre los establecimientos comerciales, pero en este caso en particular no se realizaron estos controles que hubieran evitado el suceso acaecido.*

*Por lo que estamos también frente a una Falla del servicio que Se configura por omisión de las autoridades en cumplimiento de sus funciones En este sentido, se tiene que el daño antijurídico puede ser ocasionado por el funcionamiento anormal de la administración que se concreta en el incumplimiento.*

*Es importante resaltar, que la policía nacional tiene facultad de sellar los establecimientos de comercio que no cumplan con determinados requisitos o que observen que son ilegales y presenten un peligro para la comunidad, las autoridades a cualquier momento están en la obligación de inspeccionar periódicamente estas industrias o establecimientos para llevar a cabo estos controles.*

La “razón de ser de las autoridades públicas es defender a todos los ciudadanos y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Omitir tales funciones entraña la responsabilidad institucional y la pérdida de legitimidad. El estado debe utilizar todos los medios disponibles para que el respeto de la vida y derechos sea real y no solo meramente formal”.

**Sentencia de 26 de enero de 2006, Exp. AG-2001-213.**

*Pero no obstante tenemos también unos requisitos para el transporte del combustible; que lógicamente es la intervención del estado para llevar el control vigilancia e inspección del transporte de líquidos inflamables y es como prioridad la seguridad, especialmente la relacionada con la protección de los usuarios como reza en el artículo 2 de la ley 336 de 1.990 y en el artículo 2 literal. E de la ley 105 de 1.993*

**Artículo 2º-** La seguridad especialmente la relacionada con la protección de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de transporte.

**Artículo 2 literal E:** dentro de los principios fundamentales, establece “la seguridad de las personas constituye una prioridad del sistema y del sector transporte”

*El artículo 130 de la ley 9 de 1979, - establece que en la importación, fabricación, almacenamiento, transporte, comercio manejo o disposición de sustancias peligrosas deberán tomarse las medidas y precauciones necesarias para prevenir daños a la salud humana y animal, de acuerdo a la reglamentación del ministerio de salud.*

*Si bien es cierto la responsabilidad recae sobre el autor material del hecho podemos aludir que es la pasividad de los entes encargados de la vigilancia y control, la que fortalece el transporte terrestre con productos altamente inflamables sin control e inspección y que para el caso que aquí nos referimos fue uno de los productores del daño antijurídico producido.*



*En cuanto al ministerio de minas y energía; aduce en su acta de conciliación, que "el producto APIAZOL, no es un combustible líquido derivado del petróleo, por lo tanto no le es aplicable el decreto 1073 de 2.015 y en tal sentido no requiere autorización del ministerio de MINAS Y ENERGÍA" ; en el entendido, que estaríamos frente a la hipótesis : que si este producto (APIAZOL) causo dicha explosión, se diría: que está a expensas del público un producto altamente peligroso, sin ninguna reglamentación por parte del ministerio, calificando este producto de alta peligrosidad, resultado obvio de la explosión causada, con los saldos trágicos arrojados, tanto en vidas humanas como en pérdidas materiales .*

*Tanto para la comunidad como para las víctimas de la explosión les queda difícil entender, que no es posible que dicha explosión causada en este establecimiento, por las sustancias allí manipuladas, no tuvieran el mínimo control, inspección ni vigilancia requerida por los entes controladores de los mismos; y en el supuesto evento de contar con alternativas de intervención sería pertinente determinar si las medidas adoptadas fueron oportunas y proporcionales en relación con los sucesos acontecidos.*

***Culpa in vigilando*** *Es así señor juez como podemos observar que los estamentos aquí demandados, omitieron las exigencias normativas eficientes a quienes supervisan, Por lo que allí se crea una derivación de responsabilidad objetiva, más allá del autor propio del evento dañoso, creando un ente pasivo, con los que tenían una directa obligación de inspección, vigilancia y control, siendo la inexistencia de estos mismos, la razón de la acusación del daño; es la posición pasiva de estas entidades, la que ha hecho nacer la responsabilidad civil, y que por tanto, debe asumir también la responsabilidad por su falta de vigilancia. Es así como el honorable consejo de estado se refiere:*

*"Debe precisarse también que, conforme a los principios decantados por la jurisprudencia nacional, la relación de causalidad sólo tiene relevancia para el derecho cuando responde a criterios de naturaleza jurídica, más allá de la simple vinculación física entre un comportamiento y un resultado; así, no parece necesario recurrir al análisis de la "virtualidad causal de la acción", propuesto por el profesor Entrena Cuesta, para reemplazar el citado elemento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio de que dicho análisis resulte útil para demostrar, por la vía de un argumento activo, el nexo adecuado existente entre la omisión y el daño producido. A ello alude, precisamente, la determinación de la posibilidad que tenía la administración para evitar el daño. No puede perderse de vista, además, que, en las situaciones mencionadas, podría presentarse el fenómeno de la concausalidad, como lo observa el profesor Magide Herrero, y que, en todo caso, la responsabilidad de la administración no surge, en realidad, por el hecho ajeno, sino por el propio, de modo que no se desconoce el carácter directo de la responsabilidad estatal. Es ésta, precisamente, la diferencia que existe, en el derecho colombiano, entre la responsabilidad indirecta de los particulares por culpa in eligendo o culpa in vigilando, prevista en el Código Civil, y la responsabilidad directa del Estado por la falta de vigilancia o control de un tercero, quien también podrá ser llamado a responder ante la víctima. La obligación de indemnizar surge, en este último caso, porque la actuación del tercero no le es ajena a la entidad demandada y no constituye, por lo tanto, una causa extraña que permita su exoneración."*

**(CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, Consejero ponente:, ALIER EDUARDO HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil dos (2002), Radicación: 05001-23-31-000-1993-0621-01(12789), Actor: ARGEMIRO DE JESÚS GIRALDO ARIAS Y OTROS)**

Consecuentemente a los hechos y a la normatividad antes expresada, nos encontramos frente a la teoría de una responsabilidad patrimonial extracontractual, pues no se observa precedente alguno de una vigilancia activa y dinámica, por parte de los aquí demandados, quienes debieron exigir que se aplicara la normatividad requerida y evitar la ocurrencia de estos trágicos eventos, por lo tanto, deben asumir la responsabilidad civil de su no vigilancia con el resultado de los hechos ocurridos, que evitara los daños antijurídicos causados que debe soportar la aquí demandante .

## **VI. DE LOS MEDIOS DE PRUEBA**

### **Documentales a aportar:**

1. Copia simple de la cédula de ciudadanía de mi mandante DEYSY MARIA SALDAÑA USURIAGA.
2. Copia simple de la cedula del señor RODRIGO CARVAJAL (testigo)
3. Copia simple de la cedula de ciudadanía del señor KARL ALEXANDER AGUDELO JARAMILLO (testigo)
4. Certificado de existencia de la empresa G.P.M.
5. Copia simple de la publicidad del establecimiento de comercio G.P.M.
6. Acta de la audiencia extrajudicial llevada a cabo en la procuraduría 57 Judicial I, para asuntos administrativo.
7. Certificación del comité de conciliación del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
8. Certificación del comité de conciliación de la SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
9. Certificación del comité de conciliación del MINISTERIO DE MINAS.
10. Certificación de la empresa "CAPIA LTDA" donde certifica el valor de las compras para la venta de la frutería.
11. Certificación de la empresa "LA CRECIENTE" donde certifica el valor de las compras para la venta de la frutería.
12. Fotografías del inmueble después de la explosión.
13. Copia magnética con fotos y grabaciones del inmueble después de la explosión.

### **TESTIMONIALES:**

Con el fin de que declaren sobre los hechos de la presente demanda solicito señor juez se sirva citar en la fecha y hora que usted señale, bajo la gravedad del juramento para que rindan testimonio las siguientes personas: todas mayores de edad, domiciliadas en la ciudad de Cali-Valle, a saber:

**1-Señor: RODRIGO GONZALEZ CARVAJAL**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.635.818 Expedida en la ciudad de Cali (Valle).

Quien puede ser citado en la carrera 2ª A No. 45 A-15 Barrio Salomia

Celular: 315 570 68 08

Fijo: 4 47 63 12

**2-Señor: KARL ALEXANDER AGUDELO JARAMILLO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.229.358 Expedida en la ciudad de Cali (Valle).

Quien puede ser citado en la calle 69 No. 7 E bis 68.

Celular: 311 394 07 10

Además, solicito muy respetuosamente: se sirva citar al despacho para que comparezcan y se ratifiquen del contenido de las certificaciones aportadas con la demanda, las cuales fueron expedidas por:

**1- OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ**, representante legal de la sociedad CAPIA Ltda,

**2- JOSÉ MAURICIO HERNÁNDEZ** en su condición de propietario del establecimiento de comercio "la Creciente", quienes pueden ser citados por medio del suscrito.

**VII. DE LA ESTIMACION RAZONADA CUANTIA**

La cuantía de reclamación, asciende a la suma de **CINCUENTA Y DOS MILLONES CIEN MIL PESOS (\$52.100.000.00)**,

- Perjuicios materiales (daño emergente consolidado).....	\$ 20'000.000,00
- Perjuicios materiales (lucro cesante consolidado).....	\$ 32'100.000,00
- Perjuicios materiales (lucro cesante futuro).....	indeterminado
Total.....	\$ 52'100.000,00

Dicha estimación como lo autoriza la ley, no comprende frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la prestación de esta demanda.

**DEL JURAMENTO ESTIMATORIO**

**Bajo la gravedad del juramento**, y a las luces de lo dispuesto en el artículo 206 del Código General del Proceso, manifiesto que la anterior liquidación de perjuicios materiales se ajusta a la verdad, ya que están ajustados a los medios de pruebas aportadas y a obtener en el decurso del proceso.

**VIII. DE LA COMPETENCIA**

La tiene este despacho judicial, en razón a que la cuantía no supera la determinada en el artículo 155-6 y 157 inciso 4, de la ley 1437 de 2011,(siendo la estimación razonada de la cuantía, 77 Salarios Mínimos legales Mensuales Vigentes, correspondientes a los perjuicios materiales: daño emergente consolidado y lucro cesante consolidado; y por la razón del territorio (artículo 156-6) de la ley 1437 de 2.011, toda vez que los hechos ocurrieron en la ciudad de Cali -Valle.

**IX. DE LA ACCIÓN O MEDIO DE CONTROL A PROMOVER**

La acción o medio de control a promover corresponde a la de **REPARACION DIRECTA**, establecida nuevamente en el artículo 140 de la ley 1437 de 2011.

**X. DE LOS ANEXOS**

- El poder conferido por la parte demandante
- Los documentos mencionados como medios de prueba
- Copia de esta demanda, en medio físico y magnético al **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI**.

- Copia de esta demanda en medio físico y magnético a la **NACIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE- SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE.**
- Copia de esta demanda en medio físico y magnético a la **NACION MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA.**
- Copia de esta demanda en medio físico y magnético para la **AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO.**

## **XI. NOTIFICACIONES**

Los demandados:

**1)- MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI** , a través del señor alcalde municipal, **Dr. Maurice Armitage Cadavid**, recibirá notificaciones en la avenida 2 Norte No. 10 – 70 CAM en la ciudad de Cali (Valle), teléfono (092) 887 90 20.

Email: [notificacionesjudiciales@cali.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@cali.gov.co)

**2)- MINISTERIO DE TRANSPORTE –SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS y TRANSPORTE**, en la calle 63 No. 9 A – 45, pisos 2 y 3, en la ciudad de Bogotá D.C., teléfono (091) 352 67 00.

Email: [notificajuridica@supertransporte.gov.co](mailto:notificajuridica@supertransporte.gov.co)

**3)- MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA**, en la calle 43 No. 57 – 31 CAN, en la ciudad de Bogotá D.C., teléfono (091) 220 03 00 .

Email: [notijudiciales@minminas.gov.co](mailto:notijudiciales@minminas.gov.co)

La demandante:

**DEISY MARIA SILDARIAGA USURRIAGA**, en la Carrera 49 D No. 49-38 Barrio ciudad córdoba de la ciudad de Cali (Valle). Teléfono Celular: 318 502 75 82.

El suscrito apoderado judicial **JORGE ALONSO PACHECO BOHORQUEZ**, en la calle 11 No. 4 – 42, oficina 221 del Edificio Colseguros de la ciudad de Cali (Valle), celular: 315-574 01 23

Fijo: 8 81 10 67

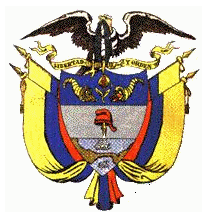
Email: [bohorqueزالonso@hotmail.com](mailto:bohorqueزالonso@hotmail.com)

Del señor Juez respetuosamente,

-----  
**JORGE ALONSO PACHECO BOHORQUEZ**

C.C. No. 19´482.790 de Bogotá D.C.

T.P. No. 243.176 del Consejo Superior de la Judicatura



REPUBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO \_\_\_\_\_ ADMINISTRATIVO DEL  
CIRCUITO DE CALI

**ORDINARIO**  
**(REPARACION DIRECTA)**

DEMANDANTE: **DEYSY MARIA SALDAÑA USURIAGA**  
C.C. No. 31'992.387 Expedida en Cali -Valle

APODERADO: **JORGE ALONSO PACHECO**  
**BOHORQUEZ,**  
C.C. No. 19'482.790 de Bogotá  
T.P. No. 243.176 del C. S. de la J.

DEMANDADOS: **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, –**  
**MINISTERIO DE TRANSPORTE-**  
**SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS y**  
**TRANSPORTE y MINISTERIO DE**  
**MINAS y ENERGIA**

**RADICACIÓN:** \_\_\_\_\_